



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado: Hernando Ayala Peñaranda

San José de Cúcuta, treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento
Radicado No: 54-001-23-33-000-2015-00436-00
Demandante: Ana Lucía Flórez de Borrero
Demandado: U.G.P.P.

Sería del caso llevar a cabo la audiencia inicial programada para el próximo cinco (5) de septiembre, si no advirtiera el Despacho que hay lugar a declarar la falta de jurisdicción para conocer del asunto de la referencia, y por lo tanto se ordenará la remisión del expediente al Juzgado Civil Laboral de Pamplona, conforme lo siguiente:

I.- Antecedentes

Las pretensiones de la demanda de la referencia, presentada en ejercicio de medio del control de nulidad y restablecimiento previsto en el art. 138 del CAPCA, son las siguientes: "...- Declarar la Nulidad de las Resoluciones No. RDP 014611 del 9 de mayo de 2014 (por la cual se niega una pensión de sobrevivientes), RDP 018273 del 11 de junio de 2014 (por la cual se resuelve un recurso de reposición), RDP 018629 del 13 de junio de 2014 (por la cual se resuelve un recurso de apelación). – Conceder la pensión de supérstite en un porcentaje del 100 (prestación periódica), por parte de la UGPP a la Sra. Ana Lucía Flórez de Borrero. – Liquidar las sumas pecuniarias dejadas de percibir por parte de la cónyuge accionante (mesadas percibidas por el hoy causante y mesadas adicionales) a partir del deceso del Sr. Borrero; esto es el 17 de junio de 1999 y hasta la fecha, amén de todos los intereses moratorios aplicables para el caso y la respectiva indexación..."

II.- Consideraciones

El Despacho, luego del análisis del ordenamiento jurídico aplicable, y de la situación fáctica advertida, considera que éste Tribunal carece de jurisdicción para conocer del proceso de la referencia, por lo cual así habrá de declararse y en consecuencia se remitirá el expediente al Juzgado Civil Laboral de Pamplona -Reparto, por ser el lugar que se tiene conocimiento prestó sus servicios el causante.

En efecto, en el numeral 4 del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A), se estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

En el numeral 1º del artículo 2º de la ley 712 de 2001, se señala que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.

De tal suerte que, los conflictos jurídicos que tengan como fuente una relación entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales, no corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que los mismos deben ser decididos en la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social.

En el presente asunto la demanda interpuesta por la señora Ana Lucía Flórez de Borrero pretende el reconocimiento del derecho de la pensión de sobreviviente causada por Luis Enrique Borrero.

Como consecuencia, solicita se condene a la UGPP a pagar las mesadas pensionales.

El causante, señor Luis Enrique Borrero se desempeñó en el Ministerio de Obras Públicas, en el cargo de CHOFER VI, en la dependencia Distrito de Conservación N° 16 "Seccional Pamplona", tal como consta en el certificado de tiempo de servicios aportado con la contestación de la demanda, visto en el CD archivos N° 3 y 4.

Así las cosas, este Desecho no tiene duda que el referido señor tenía la calidad de trabajador oficial, vinculado al Ministerio de Obras Públicas como chofer VI.

Es de recordar que para la fecha en que el causante laboraba ante el Ministerio de Obras Públicas, se encontraban vigentes el artículo 5° del Decreto Ley 3135 de 1968 señalaba que las personas que prestaban sus servicios en el Ministerios, entre otras entidades, eran empleados públicos, y los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas eran trabajadores oficiales. Norma replicada en el artículo 3° del decreto 1848 de 1969, señalándose que son trabajadores oficiales las personas que prestan su servicios en las entidades públicas, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas obras.

Posteriormente, el gobierno nacional expidió el Decreto No. 459 del 18 de febrero de 1985. "Por el cual se establece la planta de personal de trabajadores oficiales del Ministerio de Obras Públicas y transporte y se dictan otras disposiciones". En su artículo 2° se relaciona el cargo de Chofer.

Por lo tanto, el conflicto que propone su cónyuge supérstite, tiene como fuente una relación laboral contractual, por lo cual no es de conocimiento de esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme lo previsto en el numeral 4 del art. 105 del CPACA, y que indefectiblemente conlleva a que su trámite corresponde a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social.

Como soporte de esta conclusión, es importante tener presente que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Laboral¹, ha decidido casos similares al presente, por ser esa la jurisdicción competente, tal como consta en la sentencia del 6 de marzo de 2003, Magistrado Ponente Luis Gonzalo Toro Correa, en la cual se decidió el recurso de casación respecto de una sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 31 de octubre de 2001, dentro de un proceso ordinario laboral promovido por la cónyuge supérstite de un extrabajador del Ministerio de Obras que trabajaba como operador de máquina pesada, por lo cual tenía el carácter de trabajador oficial.

Con fundamento en lo expuesto, este Despacho estima que la demanda de la referencia no puede ser tramitada en esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual se ordenará remitir la misma a los juzgados laborales de Pamplona, por ser el último lugar donde se tiene conocimiento sus servicios el señor Luis Enrique Borrero.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

¹ Sentencia proferida dentro del proceso Radicación No 18528, Acta No.14, Magistrados Ponentes LUIS GONZALO TORO CORREA, actor OFELIA DE JESUS CORTES GALEANO, demandado MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

RESUELVE:

PRIMERO: Declárase la falta de jurisdicción para conocer de la demanda de la referencia promovida por la señora Ana Lucía Flórez de Borrero, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: En consecuencia, por Secretaría remítase el presente proceso a los Juzgados Civiles Laborales de Pamplona, Reparto, para lo de su competencia.

TERCERO: Háganse las anotaciones secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

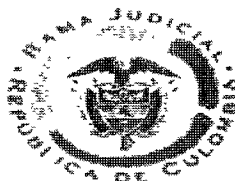
HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE
JURISDICCION LABORAL
SECRETARIAL

Se notifica a la parte demandada, notifico a las
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.

13.1 AEO 2017

x/ 
Secretaría General



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2017-00339-00
DEMANDANTE:	William Uriel Salazar Camargo
DEMANDADO:	Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- Municipio de San José de Cúcuta
MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Seria del caso proceder a dar cuenta acerca de la admisión de la demanda propuesta por el señor William Uriel Salazar Camargo a través de apoderado judicial, sino se advirtiera que el conocimiento de la misma no corresponde al Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, al de los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, conforme a lo siguiente

I. ANTECEDENTES

Da cuenta el libelista a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho procurar la nulidad parcial de la **Resolución 0586 de 10 de octubre de 2016**, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial, con el consecuente restablecimiento del derecho, demanda que fuera inicialmente promovida para ante los Juzgados Administrativos y que le correspondiera en su orden al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta de esta ciudad, dicho Despacho determinó conforme se advierte a proveído del dos (2) de mayo del presente año declararse sin competencia en virtud de la cuantía conforme y se advierte a folio 35, razón del presente pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES

En punto de la competencia la Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, precisa los asuntos que corresponde a los Tribunales Administrativos y Jueces

Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos” (.)

2 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (..)”

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos (.)

2 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (.)”

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

“Competencia por razón de la cuantía Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen. (.) Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor**” (..) “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella **Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años**” (Se resalta)

En el sub lite encontramos que la parte actora solicita que como consecuencia de la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la resolución No. **0586 de 10 de octubre de 2016**, se proceda a reconocer y pagar las cesantías de manera retroactiva tomando para ello el tiempo de servicios a partir de la vinculación del demandante y liquidada sobre el último salario devengado.

En el libelo demandatorio se razonó la cuantía de la demanda, en la suma de \$37.698.502 correspondiente a la diferencia entre el valor del reconocimiento total de las cesantías y el reconocimiento parcial efectuado por el demandado en el acto administrativo objeto de censura.

Si bien éste Despacho venía dando curso a las demandas incoadas por el mismo tema que hoy ocupa la atención del Tribunal, teniendo en cuenta para determinar la cuantía la suma propuesta por la parte actora como pretensión mayor en la demanda, reestudiándose la interpretación en punto de la competencia

puntualmente respecto de las pretensiones y revisado el acto administrativo acusado, se tiene que la Secretaría de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, realiza la liquidación de las cesantías parciales solicitadas por el demandante, con base en el valor las cesantías reportadas durante el tiempo de servicios de la misma desde 1995 hasta 2015, que corresponde a la vida laboral del señor William Uriel Salazar Camargo.

El centro de discusión ante la judicatura corresponde el determinar, si el demandante tiene o no derecho a que se aplique el régimen de liquidación de sus cesantías de forma retroactiva, régimen que tiene como característica principal, que se tenga en cuenta el último sueldo devengado por el servidor público para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que garantiza la actualización de dicha prestación.

Si bien el razonamiento en la demanda la cuantía corresponde a la diferencia que percibiría el demandante por concepto de cesantías liquidada de manera retroactiva por la totalidad del tiempo servido, esto es por espacio de 20 años, no menos resulta que la fuente de la reclamación (cesantías) se causan anualmente y sin que por ello se catalogue como prestación periódica, razonable resulta deba atenderse a fin de ajustar la cuantía a lo que en punto se ha prodigado por el legislador respecto de las prestaciones que si tienen esa condición, esto es las causadas en tres años.

En el sub judice, la diferencia a pagar fue estimada por la parte actora en \$37'.698.502, suma que al ser dividida entre los 20 años que se toman como vida laboral del actor en el ejercicio docente, arroja un resultado de \$1'.884.925,1, de lo que determina conforme y por espacio de tres años no supera el valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en consecuencia, no se habilita la competencia para que esta Corporación asuma el conocimiento en primera instancia en el asunto de la referencia.

Así las cosas, concluye el Despacho, que las presentes diligencias habrán de ser devueltas al **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta**, por cuanto a éste despacho judicial le fue inicialmente repartido el presente asunto, quién, en virtud de lo expuesto, deberá asumir el conocimiento.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,


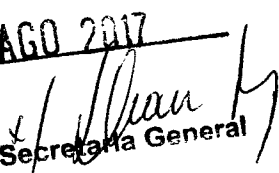
RESUELVE

PRIMERO: Previas las anotaciones a que haya lugar, **DEVOLVER** el expediente al **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta**, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: Por Secretaría háganse las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CÚCUTA
SECRETARIAL
Por medio de la presente, notifico a las
partes en la providencia anterior, a las 8:00 a.m.
31 AGO 2017

Secretaría General



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Medio de Control:	Protección de Derechos e Intereses Colectivos
Radicado No:	54-518-33-33-001- <u>2017-00073</u> -01
Demandante:	Alexander Carrillo Torres y otros
Demandado:	Secretaría de Desarrollo Social del Departamento Norte de Santander, Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Pamplona, Oficina de Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior y Otros.

En atención al informe secretarial que antecede, procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, en contra de la decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, mediante auto de fecha 21 de marzo de 2017, en relación con la decisión de rechazar por improcedente la acción interpuesta, conforme lo siguiente:

I. Antecedentes

1.1.- El Auto apelado

El Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, mediante auto de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017) (fls. 223-226), decidió rechazar por improcedente la presente acción bajo los siguientes argumentos:

Señaló que las pretensiones de la parte actora están encaminadas implícitamente a la declaratoria de nulidad del auto No. 00008 del 23 de septiembre de 2016, a través del cual la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación inscribió como delegatarios 3 y 4 de Asojuntas de Pamplona a los señores Jhon Edison Ortega Jácome y Franklin Rubiel Camacho respectivamente, personas distintas a las que señala la parte actora fueron electas, y además por cuanto en el mencionado auto se decidió no inscribir como dignatarios a los electos por el Bloque de Comisión de Convivencia y Conciliación y el Bloque de Secretarías Ejecutivas, al considerar que no se cumplieron los requisitos para ello.

Indica que las decisiones contenidas en el auto No. 00008 del 23 de septiembre de 2016, son aquellas por las cuales la parte actora se encuentra en desacuerdo al considerar que son violatorias del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

Conforme a lo anterior, consideró que resultaba improcedente dar trámite a dicha pretensión a través de la acción popular, dado que lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de naturaleza electoral, para lo cual el medio de control idóneo es el contemplado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, el cual hace referencia a la Nulidad Electoral.

Manifiesta que en virtud del inciso final del artículo 5 de la Ley 472 de 1998, se efectuó el estudio de admisión de lo pretendido, bajo el medio de control de

nulidad electoral, no obstante, se observó que los términos para demandar se encuentran vencidos.

Igualmente, precisó que en caso de admitirse que el auto No. 00008 del 23 de septiembre de 2016, pudiese demandarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por aquellas personas que se consideran lesionadas de un derecho subjetivo, tampoco resulta procedente su admisión, dado que respecto a este medio de control los términos para interponerlo también se encuentran vencidos.

Finalmente señaló que en lo referente a la pretensión de ordenar a la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento Norte de Santander, que dentro de un término perentorio fije fecha para llevar a cabo las elecciones de Juntas de Acción Comunal en los barrios la Española, la Romero y Chíchira, carece de competencia, por cuanto es un asunto que debe resolverse ante la correspondiente instancia administrativa y no por vía judicial.

1.2.- Fundamentos del recurso interpuesto

El apoderado de la parte actora, presentó el día 24 de marzo de 2017 (fls 229 y s.s.), recurso de apelación en contra del auto interlocutorio No. 182 de fecha 21 de marzo de 2017, solicitando sea revocada la decisión contenida en los numerales 1° y 2° del auto impugnado y en consecuencia se ordene continuar con el trámite de rigor y se acceda al decreto de las medidas cautelares.

El accionante alega que en el presente asunto no se trata de la elección de los dignatarios sino de la distribución de los cargos, dado que dicha distribución se realizó de manera irregular, por cuanto no se reconocieron los verdaderos dignatarios elegidos hasta el 2020.

Señala que en ningún momento se impugnaron las elecciones o se solicitó se declararan nulas, por cuanto las mismas fueron correctamente realizadas a excepción de la tentativa de fraude. Reitera que lo que se pretende aquí es obtener el reconocimiento correcto y legal de quienes fueron electos el 31 de agosto de 2016, dada la vulneración de los derechos colectivos y fundamentales que están expresos y evidenciados en el presente asunto, al reconocer por intermedio de un concepto amañado del Ministerio del Interior, a unos ciudadanos como Delegados No. 3 y 4, por acción de un diputado interesado.

Manifiesta que en lo referente a las elecciones, se ha solicitado la actuación de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, pero a la fecha no se han realizado las elecciones y por consiguiente vulneran y sigue vulnerando los intereses de los ciudadanos pamploneses.

1.3.- Traslado del recurso

1.3.1. Parte demandante:

Guardó silencio.

1.4.- Concesión del recurso.

Mediante auto de fecha 04 de abril de 2017, obrante a folio 241 del expediente, el Juzgado Primero Administrativo de Oral de Pamplona, concedió el recurso de

apelación presentado por la parte actora en contra del auto de fecha 21 de marzo de 2017, por medio del cual se rechazó por improcedente el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

II. Consideraciones

2.1.- Competencia

La Sala tiene competencia para decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto en contra del auto interlocutorio No. 182 de fecha 21 de marzo de 2017, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, con fundamento en lo reglado en el art. 125 de la Ley 1437 de 2011 y a la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

2.2.- Decisión del presente asunto en segunda Instancia.

La Sala, luego de analizada la providencia apelada, los argumentos expuestos en el recurso de apelación y el ordenamiento jurídico pertinente, llega a la conclusión que habrá de revocarse el auto de fecha 21 de marzo de 2017, por el cual el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona resolvió rechazar por improcedente la acción interpuesta bajo los siguientes argumentos:

Importa recordar que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, resolvió rechazar por improcedente la presente acción al considerar que lo que se persigue con el presente medio de control es la nulidad de un acto administrativo de naturaleza electoral contenido en el Auto No. 00008 del 23 de septiembre de 2016, suscrito por la Dra. Ruby Alejandra Chacón Camargo en calidad de Secretaria de Desarrollo Social del Departamento Norte de Santander, por medio del cual se resolvió inscribir a la Asojuntas de Pamplona para el periodo 2016-2020 en los bloques directivo, fiscal y delegados, y no inscribir los dignatarios electos para los bloques de comisión de convivencia y conciliación, y secretarías ejecutivas.

Al respecto, señaló que el medio de control idóneo es el contemplado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, el cual hace referencia a la Nulidad Electoral y que para tal efecto los términos para interponer demanda ya vencieron.

Ahora bien, la Sala no comparte la conclusión a la cual llegó el A quo, por cuanto una vez revisado el escrito de demanda y el recurso de apelación, se observa que tal como lo manifiesta la parte actora, dentro del presente asunto no se pretende expresamente la nulidad de la elección de los dignatarios, por cuanto a su criterio la misma se realizó en debida forma.

Lo que se pretende en el presente asunto es obtener el reconocimiento de quienes fueron electos el 31 de agosto de 2016, aplicando el cociente electoral, que para el bloque de delegados de Asojuntas a la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal fueron elegidos como delegados No. 3 y 4 el señor Luis Enrique Velazco y la señora Antonia Arteaga respectivamente y no los señores John Edison Ortega Jácome y Franklin Rubiel Capacho, como en efecto se dispuso mediante auto No. 00008 de fecha 23 de septiembre de 2016, proferido por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Norte de Santander.

Igualmente, se solicita el reconocimiento de quienes salieron electos para el comité de Conciliación y Convivencia, los señores Cecilia Ramirez, Rosa Nelly

Reyes y Antonio Suárez, dado que a su juicio el Diputado Jhon Eddison Ortega y otras personas, presionaron a los miembros de la mesa electoral para que en el acta figuraran elegidos en dicho comité los señores Víctor Sandoval y Belcy Conde.

En estos términos, es claro para la Sala que las pretensiones no van encaminadas a la declaratoria de nulidad de un acto de elección, el cual refiere la Juez de instancia hace referencia al auto No. 00008 de fecha 23 de septiembre de 2016, por cuanto la inconformidad radica es en la errada distribución de los cargos, dado que a criterio de la parte actora, dicha distribución se realizó de manera irregular, por cuanto no se reconocieron los verdaderos dignatarios elegidos hasta el 2020 y con esto se le está vulnerando la moralidad administrativa a los pamploneses.

Ahora bien, si en gracia de discusión las pretensiones implícitamente atacaran el auto del 23 de septiembre de 2016, se tiene que dentro del mismo simplemente se inscribió la elección de dignatarios de Asojuntas de Pamplona Urbano en lo que corresponde a los bloques Directivo, Fiscal y Delegados, para el periodo del 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2020, siendo este un acto de registro y no de declaración de una elección como lo consideró el a quo en el auto apelado.

Lo anterior por cuanto del artículo 49 de la Ley 743 de 2002, se puede inferir que en el evento de presentarse una demanda electoral y esta ser aceptada, no implica que el registro de los dignatarios sea suspendido, pues el mismo se puede llevar a cabo mientras se cumplan los requisitos, lo cual quiere decir que dicho acto administrativo no es un acto electoral como ya se mencionó sino que simplemente es un acto administrativo de registro.

“ARTÍCULO 49. NULIDAD DE LA ELECCIÓN. La presentación y aceptación de la demanda en contra de la elección de uno o más dignatarios de una organización comunal no impiden el registro de los mismos siempre que se cumplan los requisitos al efecto.

Declarada la nulidad de la elección de uno o más dignatarios se cancelará el registro de los mismos y la autoridad competente promoverá una nueva elección.”

Conforme a lo expuesto y para aclarar qué es un acto electoral, resulta pertinente traer a colación la definición expuesta por la Sección Quinta del H. Consejo de Estado, mediante auto de fecha 27 de mayo de 2017 en el cual se señaló:

“El acto electoral es aquel por medio del cual la Administración declara una elección o hace un nombramiento o una designación (actos de elección popular, los de elección por corporaciones electorales, los actos de nombramiento de cualquier autoridad pública y los de llamamiento para suplir vacantes en las Corporaciones públicas).”

Así las cosas, para la Sala el auto No. 00008 de fecha 23 de septiembre de 2016, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento Norte de Santander, no es un acto electoral el cual deba ser demandado mediante el medio de control de nulidad electoral, por cuanto el mismo se reitera es un acto de registro.

Finalmente, en lo que respecta a la pretensión de la parte actora de ordenar a la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento fijar fecha para las elecciones de Juntas de Acción Comunal en los barrios la Española, la Romero y Chinchira, la misma también resulta procedente dentro del presente medio de control, por cuanto a la fecha aun existiendo el fallo No. 2 de fecha 11 de agosto de 2016, proferido por la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Asociación de

Juntas de la Acción Comunal de Pamplona, que resolvió que en un periodo no superior a 60 días debían realizarse, aún no se han llevado a cabo, lo cual genera una omisión de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, que puede conllevar una vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa citado por los accionantes.

Como corolario de lo anterior, la Sala estima procedente revocar la decisión de rechazar por improcedente el presente medio de control, contenida en el auto de fecha 21 de marzo de 2017, y en su lugar se ordenará que se provea sobre la admisión de la demanda.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE:

PRIMERO: Revocar el auto de fecha 21 de marzo de 2017, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, mediante el cual se decidió rechazar por improcedente el presente medio de control, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: En consecuencia, ordénese al Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona proveer sobre la admisión de la demanda, si se cumplen con los demás requisitos de Ley.

TERCERO: Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones secretariales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Aprobada y discutida por la Sala de Oralidad No. 4 en sesión de la fecha)


ROBIEL AMEL VARGAS GONZÁLEZ
Magistrado


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado


EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER**
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.

Levy 31 AGO 2017


Secretaría General



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Sustanciador: Edgar Enrique Bernal Jáuregui

EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2017-00523-00
DEMANDANTE:	CARLOS EDUARDO MORA ERAZO
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Seria del caso proceder a analizar si la demanda reúne los requisitos legales para su trámite, sino se advirtiera que el conocimiento del presente asunto no corresponde a este Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, al **Tribunal Administrativo de Nariño**, por lo cual procederán a exponerse, las razones y argumentos que conllevan a tal conclusión.

I. ANTECEDENTES

El señor CARLOS EDUARDO MORA ERAZO, en nombre propio y por medio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, promueve demanda en procura, principalmente, de obtener de la declaratoria de nulidad de la **Resolución 8813 del 4 de octubre de 2016**, por el cual se retira del servicio activo de las Fuerzas Militares a unos Oficiales Superiores del Ejército Nacional, con el consecuente restablecimiento del derecho.

Repartido el asunto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto, por medio de proveído del 15 de junio de 2017 (fls. 243-244), decide declararse sin competencia por el factor cuantía y ordena remitir el asunto al Tribunal Administrativo de Nariño.

Mediante auto del 11 de julio del año en curso, el Tribunal Administrativo de Nariño ordena remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al considerar que conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 156 del CPACA, no tiene competencia en razón del territorio para conocer del asunto, ya que en la narración de los hechos la parte actora hace saber que mediante Resolución 0213 del 4 de octubre de 2016, el Comando del Ejército Nacional decidió trasladar al señor Carlos Eduardo Mora Erazo a la Brigada Móvil 23 con sede en Ocaña, Norte de Santander, tal como se registró en la hoja de servicios.

II. CONSIDERACIONES

La Ley 1437 de 2011 –CPACA- en su artículo 156, establece las reglas de competencia por razón del territorio, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

“Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. (...)"

De acuerdo con esta norma, la circunscripción territorial dentro de la cual deben ejercer su función los diferentes despachos judiciales de la jurisdicción Contencioso Administrativa, en lo que respecta a los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, se encuentra asignada de forma exclusiva, al juez del último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios.

La intención del legislador de fijar la competencia para este tipo de asuntos en el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios, tiene fundamento práctico, razonable y privilegia los derechos de quienes se desempeñan o desempeñaron como servidores públicos, evitando la congestión y facilitando la resolución pronta y eficaz de los conflictos laborales que se someten a la jurisdicción, lo cual se traduce en el cumplimiento de una de las finalidades de la Ley 1437 de 2011, como es la de dotar de celeridad las actuaciones judiciales.

Aunado a ello, debe entenderse que tal fuero territorial busca facilitar el acceso a la administración de justicia y el ejercicio del derecho a la defensa y contradicción de los servidores o ex servidores públicos, si se tiene en cuenta que el artículo 78 del Código Civil dispone que el lugar donde el individuo ejerce de forma habitual su profesión u oficio, establece su domicilio.

Descendiendo al caso concreto, visto el libelo demandatorio, el apoderado del demandante, afirma que el Comando Superior en Bogotá del Ejército Nacional ordenó el traslado del señor Mayor CARLOS EDUARDO MORA ERAZO a la Brigada Móvil 23 con sede en Ocaña, Norte de Santander de la que nunca le notificaron, enterándose cuando lo llamaron vía telefónica a preguntarle cuando se iba a presentar.

Así mismo, comenta que cuando el señor Mayor MORA ERAZO compareció el 8 de octubre de 2016 ante la Brigada Móvil 23, con el fin de hacer la presentación por traslado, en la oficina de personal le manifestaron que no podía hacer ninguna presentación, porque estaba dado de baja o retirado, luego no alcanzó a ser ni un día orgánico de la Brigada Móvil 23 con sede en Ocaña.

Fuera de lo anterior, el extracto de hoja de vida del demandante, obrante en folios 75 a 83 del expediente, indica en el acápite de traslados, el de fecha 4 de octubre de 2016 con destino a la Brigada Móvil 23, acto administrativo Res-Ejc 02138 del 5 de octubre de 2016, por un tiempo de 0 meses.

En estas condiciones, resulta desacertado considerar que el último lugar de prestación de servicios del demandante fue la ciudad de Ocaña, dado que la orden de traslado nunca se hizo efectiva, máxime si se tiene en cuenta que la decisión de retirarlo del servicio se produjo el mismo 4 de octubre de 2016.

Bajo el anterior orden de ideas, atendiendo que para la fecha de expedición del acto administrativo por el cual se le retira del servicio activo de las Fuerzas Militares, el señor Mayor CARLOS EDUARDO MORA ERAZO se encontraba aun prestando sus servicios en el Batallón de Infantería 9 Batalla de Boyacá con sede en la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, es claro que no se habilita la competencia por el factor territorial para que esta Corporación asuma el conocimiento en el asunto de la referencia, sino por el contrario, el **Tribunal Administrativo de Nariño**.

Así las cosas, en aplicación del inciso segundo del artículo 158 del CPACA,¹ se declarará la falta de competencia y se dispondrá remitir el asunto al Consejo de Estado, para que decida el conflicto.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la falta de competencia para conocer del asunto dela referencia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: PROPONER conflicto negativo de competencia ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del CPACA.

TERCERO: En consecuencia, por la Secretaría de la Corporación, **REMITIR** el expediente al Consejo de Estado, para lo de su competencia, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado.-

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER
CONSEJO DE ESTADO

Por anotación en ES 11110, radicado a las
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.

13 1 AGO 2017.

Secretaría General

¹ "Artículo 158. Conflictos de Competencia. () Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto ()"